



Perspectivas del desarrollo global 2012: cohesión social en un mundo cambiante

Resumen en español

- El mundo ha cambiado notoriamente desde los inicios del nuevo milenio. El término "riqueza cambiante" describe un fenómeno en el cual el centro de gravedad económico del planeta se movió de manera progresiva del Occidente al Oriente y del Norte al Sur, lo que generó una nueva geografía del crecimiento. El nuevo escenario presenta algunas oportunidades y desafíos importantes para la creación de sociedades cohesivas.
- En este informe se examina la cohesión social en países en desarrollo con un rápido crecimiento y se proporciona a los encargados de elaborar las políticas recomendaciones sobre maneras de fortalecerla. Una sociedad cohesiva trabaja hacia el bienestar de todos sus miembros, combate la exclusión y la marginación, crea un sentido de pertenencia, fomenta la confianza y ofrece a sus integrantes la oportunidad de lograr la movilidad ascendente. En este informe se analiza la cohesión social a través de tres ópticas diferentes pero igualmente relevantes: la inclusión social, el capital social y la movilidad social.
- En este documento se sostiene que la cohesión social es una meta valiosa en sí misma y contribuye a mantener el crecimiento económico a largo plazo. Es poco probable que las rutas del crecimiento en las que haya amplias desigualdades sociales, una gran exclusión y un pequeño margen para expresar las diferencias de opinión sean sostenibles. El informe hace hincapié en la necesidad de una elaboración de políticas coordinada en los ámbitos del diseño fiscal e impositivo, el empleo, la protección social, la participación civil, la educación, el género y la migración. Puesto que las políticas en estas áreas interactúan entre sí en lo que respecta a su efecto en los resultados sociales, es necesario que cada ámbito de política se diseñe tomando en cuenta a los demás.

La riqueza cambiante brinda oportunidades para la cohesión social...

En la década pasada los países en desarrollo en su conjunto disfrutaron un resurgimiento de su fortuna económica después de cerca de 20 años de oportunidades perdidas y un desempeño decepcionante. Por primera vez desde hace muchas décadas, durante los años 2000 los países en desarrollo más pobres crecieron con mayor rapidez que las economías de ingresos altos. En dicha década un número significativo de países en desarrollo (83) logró duplicar las tasas de crecimiento per cápita de la OCDE (medida utilizada en las Perspectivas de desarrollo global 2010 para definir a los "países convergentes") en comparación con sólo 12 países en el decenio de 1990. La década de 2010 ha comenzado con perspectivas de crecimiento global más sombrías que las de los años 2000, ya que el crecimiento se estancó en las economías avanzadas en el proceso de recuperación de la crisis. Con un entorno internacional menos propicio para el crecimiento, la nueva década seguramente pondrá a prueba la fortaleza de los nuevos motores de crecimiento y la sostenibilidad de los cambios en la riqueza.

Alrededor de 50 de esas economías en desarrollo y emergentes crecieron a una tasa anual promedio de más de 3.5% per cápita durante la década de 2000. Hoy, cerca de mil millones de los dos mil millones de personas en el mundo que viven con un ingreso de USD 10 a USD 100 al día –la clase media global– viven en países convergentes. Se proyecta que este número llegará a más de tres mil millones en 2030. Las altas tasas de crecimiento trajeron consigo nuevos recursos que podrían utilizarse para promover y financiar un proceso de crecimiento más incluyente, particularmente tomando en cuenta las expectativas y contribuciones de las clases medias emergentes a la cohesión social.

...pero también plantea nuevos desafíos.

Las transformaciones económicas y sociales ocurridas durante un periodo de crecimiento rápido desencadenan nuevas tensiones que los gobiernos deberán enfrentar. Los desafíos incluyen desigualdades crecientes en ingresos, la transformación estructural y la necesidad de satisfacer las expectativas cada vez más altas de los ciudadanos en cuanto a los estándares de vida y el acceso a las oportunidades. Los ciudadanos que viven en una economía con crecimiento rápido tienen expectativas crecientes con respecto a sus estándares actuales y futuros de vida pues desean compartir los beneficios de ese crecimiento. A medida que una emergente clase media se compara cada vez más con sus pares de las economías avanzadas, puede esperarse que cambien sus hábitos de consumo y demandas de servicios de calidad. Los ingresos más altos, una mejor salud y una mejor educación no equivalen automáticamente a una mayor satisfacción de vida, como lo demuestra la baja en este rubro en países con rápido crecimiento como Tailandia y Túnez. Los gobiernos no deben ignorar los esfuerzos de estas clases medias emergentes ni subestimar su capacidad de movilizar a las personas y ejercer presión para que los gobiernos sean más abiertos y transparentes o para que se eleven los estándares de prestación de servicios.

En este contexto el fortalecimiento de la cohesión social se convierte en un objetivo de política crucial. Los gobiernos que ignoren los asuntos relacionados con este tema corren el riesgo de tener que enfrentar inestabilidad social y emprender intervenciones de política ineficaces. Los sucesos recientes –desde los disturbios a favor de la democracia en Tailandia en 2010 hasta las revoluciones de la Primavera Árabe– sustentan la tesis de que obviamente no es suficiente aplicar marcos de política adecuados desde el punto de vista tecnocrático desatendiendo el deseo de los ciudadanos de contar con procesos políticos incluyentes.

Las políticas públicas importan

Si bien un fuerte proceso de crecimiento plantea nuevos desafíos para los países convergentes, hay una amplia evidencia de que las políticas públicas importan. Las políticas redistributivas constituyen un poderoso ejemplo de ello. Los países de la OCDE con desigualdades en los ingresos inicialmente altas redistribuyen dichos ingresos mediante impuestos y transferencias, en tanto que en muchos países en desarrollo (por ejemplo, en América Latina), los sistemas tributarios y de transferencias ejercen un efecto mucho más limitado en la distribución de los ingresos.

El fortalecimiento de la cohesión social requiere una visión y un compromiso a largo plazo. Mientras que algunas intervenciones o reformas de política pueden generar resultados con relativa rapidez, otras no fructifican por algún tiempo. Se requieren varios años para convertir la conformación de un sistema educativo más incluyente, por ejemplo, que aumente los niveles educativos de la población desfavorecida y el nivel promedio de educación, en una mayor

movilidad social intergeneracional. Ese tipo de visión y compromiso a largo plazo con las políticas exige también un entorno macroeconómico estable.

La tarea de coordinar la política en varios terrenos puede representar un desafío significativo. Las herramientas para facilitar la coordinación incluyen grupos o comisiones interministeriales, evaluaciones de impacto prospectivas de las leyes y la asignación horizontal de presupuestos basada en temas. Por ejemplo, la asignación de presupuestos con perspectiva de género promueve la igualdad de género al identificar las intervenciones requeridas para resolver las disparidades de género en las políticas, los planes y los presupuestos sectoriales y de los gobiernos locales.

Áreas de política que son fundamentales para la cohesión social

Política fiscal

Un mayor espacio fiscal abre una ventana de oportunidad para el desarrollo y para una cohesión social más fuerte en los países en desarrollo. Sin embargo, para que las oportunidades se materialicen es necesario realizar reformas de la política fiscal. Las ganancias y los recursos inesperados disponibles gracias a la riqueza cambiante son una gran ayuda para el financiamiento de programas sociales. Ahora bien, éstos por sí mismos no bastan, los programas deben ser asequibles y sostenibles. Un tema crucial a este respecto es asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los programas sociales, un objetivo elusivo en el contexto amplio de ingresos volátiles dependientes de precios de productos fluctuantes y el posible agotamiento de los recursos naturales no renovables. Los países convergentes aumentaron de manera gradual sus ingresos fiscales de 20% del PIB en promedio en 2000 a 27% en 2008. No obstante, dado que los ingresos fiscales promedio son aún bajos en las economías convergentes en comparación con los países de la OCDE con ingresos altos, en donde se encuentran arriba del 35% del PIB, hay margen para instaurar reformas tributarias que amplíen la base imponible o aumenten las tasas de impuestos.

Sin embargo, los bajos niveles de confianza –acerca de la manera en que se suben los impuestos y se gastan los ingresos– a menudo minan reformas que consideran los impuestos por separados del gasto complementario y de las reformas institucionales. Varios factores sociales causan un efecto importante en la baja legitimidad del Estado, en particular con respecto a la política fiscal. Esto puede traducirse en ingresos más bajos y en políticas fiscales que por lo general son menos eficaces para resolver las desigualdades y crear oportunidades para una movilidad social ascendente. Además, incluso donde en efecto existen instituciones democráticas formales, la política fiscal tiende a reflejar los intereses de las élites y los grupos poderosos de presión si se excluye a grandes secciones de la población del proceso político o si éstas tienen un acceso limitado a los instrumentos colectivos para influir en las políticas.

Las instituciones económicas y fiscales que desvinculan los gastos de la volatilidad de los ingresos actuales son fundamentales para el aseguramiento de un financiamiento sostenible de las políticas de cohesión social. Una función importante de la política fiscal macroeconómica es crear las condiciones para contar con un espacio fiscal suficiente y predecible para financiar las prioridades de gasto en desarrollo relacionadas con la cohesión social, bien se trate de pensiones sociales, compensación por desempleo, educación o programas de empleo para jóvenes. Las reglas fiscales que obligan a los gobiernos a ahorrar durante los buenos tiempos de modo que puedan mantener la inversión pública durante las recesiones económicas pueden intervenir en forma importante. De modo similar, los fondos soberanos pueden ayudar a los exportadores de productos no renovables a ampliar los ingresos vinculados con los recursos con el tiempo y entre generaciones.

La reforma de la administración tributaria es otra manera poderosa de aumentar la justicia, la transparencia y la conciencia de pago de los impuestos en los países en desarrollo. Sin embargo, para ser eficaz debe formar parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer el contrato social. Las reformas, como el establecimiento de agencias recaudadoras de impuestos semiautónomas, tendrá un mayor impacto si se combina con una reforma de la política de gastos. Una recaudación de impuestos mejor y más transparente debe estar ligada a mejores servicios públicos. Este pacto fiscal, es decir, el vínculo entre los servicios recibidos a cambio de los impuestos pagados, es esencial para crear un círculo virtuoso para el cumplimiento en el renglón tributario y la prestación de servicios.

Empleo y protección social

La profunda transformación que la riqueza cambiante ha ocasionado requiere establecer instituciones del mercado laboral que puedan facilitar la fijación de salarios y las funciones distributivas y asignadoras de los mercados laborales. Las reformas que establecen garantías para los trabajadores y los sistemas de negociación colectiva pueden comenzar a formar instituciones que ayuden a los mercados a ajustar los precios al nuevo régimen del mercado laboral en manera menos conflictiva y a la vez asegurarse de que los salarios reflejen los aumentos en productividad. Proteger a los trabajadores no necesariamente significa proteger los empleos. De hecho, en los países emergentes con sistemas

de protección social maduros es posible promover una agenda que busque proporcionar seguridad en los ingresos mediante la protección social más que mediante la seguridad en el empleo, al ofrecer asistencia y seguro de desempleo, apoyo al ingreso mientras se está desempleado y en la edad avanzada, así como una gama de servicios públicos, incluida la atención a la salud.

En el corto plazo, los instrumentos de regulación del mercado laboral más tradicionales, en particular los salarios mínimos, han asumido un papel prominente en el debate de políticas, que incluye los países de ingresos bajos del África Subsahariana y los más pobres de América Latina. Los salarios mínimos son una herramienta útil para combatir la pobreza en el trabajo, incluso cuando el cumplimiento es limitado. De hecho, los aumentos a los salarios mínimos también se extienden al sector informal, aumentando los salarios en toda la economía. Algunos países, como Brasil, han utilizado en gran medida los salarios mínimos para elevar el estándar de vida de los trabajadores. Pero los salarios mínimos no son instrumentos específicamente focalizados y tienden a tener efectos colaterales de amplio alcance: los aumentos importantes en dichos salarios pueden ser costosos o causar efectos negativos en el empleo si se utilizan en forma incorrecta. Más aún, los efectos de los cambios en los salarios mínimos se repercuten de forma desigual entre los trabajadores, según el grado de aplicación y de segmentación del mercado laboral. Por consiguiente, el uso activo de los salarios mínimos para aumentar los ingresos no debería sustituir a la política social eficaz ni al aseguramiento de que las instituciones del mercado laboral cumplan con eficiencia con su labor de fijación de precios.

Las instituciones del mercado laboral y los sistemas de protección social deben juzgarse no sólo en términos de su eficacia, sino también de su capacidad para prevenir o mitigar la dualidad y la segmentación. Las innovaciones recientes en la protección social (la expansión de transferencias en efectivo, condicionadas o no, las pensiones sociales y las nuevas formas de cobertura de salud) han ayudado a reducir los vacíos de cobertura en la protección social. Sin embargo, a menudo pueden dar paso a sistemas duales donde los más pobres están cubiertos por la asistencia social y los ricos, por alternativas privadas o basadas en aportaciones. Esto deja un vacío significativo, una "vacío intermedio" de cobertura entre un gran segmento de los trabajadores informales con ingresos medios. Para que las instituciones produzcan resultados justos con un mínimo esfuerzo, necesitarán evolucionar de modo que reflejen mejor las realidades de los mercados laborales. Los derechos universales desvinculan la protección social del estatus del empleo y ofrecen las mejores perspectivas en cuanto a niveles de cobertura y estructuras de incentivos para los mercados laborales.

Tal vez el acceso universal a los servicios sociales básicos no se logre en el corto a mediano plazo, pero de todas maneras los gobiernos cuentan con varias herramientas más asequibles. Por ejemplo, la ampliación de los servicios sociales por medio de transferencias de efectivo focalizadas puede ser comparativamente asequible; los programas de Brasil, Indonesia y México han alcanzado una cobertura de hasta un tercio de la población y cuestan menos de 1% del PIB. Los sistemas basados en aportaciones pueden desagregarse y abrirse a los trabajadores no cubiertos, como es el caso de las cuentas de ahorro de seguro contra el desempleo en América Latina.

Propiciar la cohesión social por medio de los servicios sociales y otros programas está supeditado a la disponibilidad de los recursos adecuados y también a la mejora de la eficiencia del gasto público. La idea de que los gobiernos no pueden costear medidas para fortalecer la protección social debe contrastarse con el hecho de que a menudo dichos gobiernos proporcionan grandes subsidios o pagos que benefician a sectores de la población que no son pobres. Por ejemplo, los instrumentos como los subsidios a los combustibles y los alimentos pueden ser extremadamente caros y distorsionadores. Éste es el caso en particular de los subsidios a los combustibles que tienden a ser muy regresivos.

Educación

La educación es una parte vital de cualquier agenda de cohesión social, ya que los resultados educativos afectan las tres dimensiones del triángulo de cohesión social. Cuando se brindan oportunidades para una educación de calidad a toda la población, la educación se convierte en un fuerte factor nivelador de oportunidades, llevando perspectivas de movilidad ascendente incluso a los grupos desfavorecidos. Aumentar el nivel educativo es una manera importante para que los países convergentes reduzcan la desigualdad en los ingresos del mercado en el largo plazo, en particular dado que los retornos de la educación han cambiado como consecuencia de la riqueza cambiante. Más allá de la matrícula, es necesario prestar atención a la calidad de la educación de modo que los aumentos en los resultados educativos en efecto se traduzcan en una mayor productividad, en mejores perspectivas de crecimiento y en mejores oportunidades en el mercado laboral.

Asegurar que los niños tengan oportunidades equitativas para construir su capital humano, sin importar sus antecedentes socioeconómicos, es un desafío trascendental para fortalecer la cohesión social. Varias intervenciones pueden ayudar a disminuir la importancia de los antecedentes y alentar a alumnos de todos los sectores, incluido el más

desfavorecido, a adquirir más educación. Un objetivo clave deberá ser reducir al mínimo las diferencias en la capacidad de los individuos de beneficiarse de una educación formal. Las contribuciones no escolares, como la nutrición en los primeros años de vida y los programas preescolares, intervienen de manera fundamental a este respecto: se estima que más de 200 millones de niños no alcanzan su potencial total de desarrollo debido a retrasos en el crecimiento, así como a deficiencias de hierro y de yodo.

De igual forma, los instrumentos que reducen los costos de oportunidad de la educación continua pueden mejorar los niveles de educación completados. Bajar el costo de la educación es un primer paso importante para alentar que los alumnos completen la educación media y se matriculen en la educación superior. Se sabe que las transferencias de efectivo condicionadas y las iniciativas de alimentación para la educación son instrumentos eficaces para elevar el nivel escolar.

Los esfuerzos para cerrar el diferencial de género en la educación son significativos en particular debido a que, además del carácter imperativo de lograr un acceso igualitario a la educación para varones y niñas, puede ayudar a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. De hecho, la educación materna tiene efectos positivos en la salud de los niños y en sus perspectivas futuras. Las políticas e instalaciones escolares sensibles al género en efecto propician la integración social.

La experiencia educativa en sí también ejerce un efecto en la cohesión social, puesto que conforma y transmite valores comunes que apuntalan el capital social y la inclusión. La manera en que se instruye a los niños es importante para conformar su sentido de pertenecer a una sociedad. La educación debe organizarse para aumentar la participación de los niños pertenecientes a grupos desfavorecidos, haciendo así más incluyente la educación. Una mayor inclusión puede también ser resultado del desarrollo de técnicas de enseñanza y currícula que fomentan la diversidad y mejoran las percepciones positivas de otros dentro del sistema y la sociedad. Esto se aplica en particular a la mejor integración de las minorías en la educación. Los países donde la inclusión en la escuela es mayor por lo general son también aquellos donde la confianza entre los diferentes grupos de la sociedad es más fuerte. Más aún, los sistemas educativos incluyentes tienden a funcionar mejor en términos de resultados de aprendizaje que los sistemas segmentados.

Género

A pesar del alto crecimiento alcanzado en los últimos 20 años, muchos países no han hecho avances reales para mejorar la igualdad de género. La dinámica cultural y el hecho de que las instituciones sociales se encuentran en la raíz de las relaciones de poder existentes hace que confrontar a las instituciones sociales discriminatorias sea una tarea de enormes proporciones. Por ende, proporcionar incentivos para el cambio es crucial. El cambio debe iniciarse en las áreas del empleo, la educación y el espíritu empresarial mediante, por ejemplo, el aumento del acceso de las mujeres al crédito y la tecnología, y el suministro de transferencias en efectivo condicionadas, específicamente orientadas a transformar a las instituciones sociales discriminatorias como el matrimonio forzado y el matrimonio a una edad temprana.

Un punto de arranque crucial para resolver los cuellos de botella institucionales en el área de la igualdad de géneros es la mejora de las actividades productivas de las mujeres al garantizarles derechos de propiedad y de herencia. El acceso limitado a los recursos reduce la capacidad de las mujeres y las niñas de generar un ingreso sostenible, y puede obligarlas a aceptar empleos inseguros o con remuneración más baja. Más aún, la falta de acceso a la tierra y de control sobre ella puede tener un impacto negativo en la seguridad alimentaria de la familia, aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza o la violencia, impedirles el acceso a préstamos bancarios o servicios financieros, y reducir su poder de toma de decisiones.

Migración

La migración sur-sur, es decir, la migración entre países en desarrollo, ha aumentado significativamente y se ha diversificado durante las últimas dos décadas, tendencia que con probabilidad se intensificará en el futuro. Pero la integración de los inmigrantes es un desafío no sólo en los países ricos sino también en los pobres. La experiencia de las economías emergentes es sintomática de los desafíos que la integración representa para los países con inmigración en todo el planeta. Si bien de hecho enfrentan los mismos desafíos que las poblaciones nativas, los inmigrantes a menudo son además privados del acceso a servicios públicos dignos. En tanto que los recursos limitados en los nuevos países de destino de inmigrantes causan inquietud con respecto al desarrollo de medidas específicas contra la exclusión social de los inmigrantes, la historia de la integración en los países de la OCDE parece sugerir que cuanto más pronto resuelvan este asunto las naciones, más éxito tendrán las intervenciones de política.

La cohesión social relacionada con la migración debe ir más allá de las medidas antidiscriminación. Un proceso de integración sin mayores obstáculos debe, en particular, incluir un conjunto exhaustivo de medidas sociales, de

empleo, de educación y de vivienda. También es necesario que se hagan esfuerzos para mejorar las percepciones de los ciudadanos nativos con respecto a los inmigrantes. Las políticas deberían prevenir y revertir la exclusión social de éstos, la cual es aún la mayor barrera individual a la integración total; propiciar la vinculación positiva de los inmigrantes y los habitantes locales, y, por último, promover la movilidad social para los inmigrantes al mejorar la movilidad en el mercado laboral, facilitar el espíritu empresarial, mejorar la ubicación óptima de capacidades y fomentar la educación.

Diseño y puesta en marcha de políticas de cohesión social

Participación cívica - una agenda de política incluyente

Dar espacio a las voces disidentes es fundamental para la creación de una sociedad sostenible y socialmente cohesiva. El aprovechamiento de los mecanismos de participación cívica y retroinformación política es esencial para que los procesos de crecimiento no pierdan el rumbo. Esto aplica en particular en el contexto de los cambios en la riqueza, donde un crecimiento económico más rápido y una mayor dislocación social requieren respuestas innovadoras. El proceso de elaboración de políticas es tan importante como las políticas mismas para construir la cohesión social. La cohesión social mejorará por un proceso de elaboración de políticas incluyente y coordinado.

La elaboración de políticas incluyente toma en cuenta los puntos de vista de todos los interesados, desde aquellos que las ejecutarán hasta los beneficiarios finales. Las políticas que resultan de un proceso como éste se benefician de tener una mayor legitimidad y apoyo, factores que al final determinan su eficacia. Promover la participación cívica y la descentralización podría demostrar ser una herramienta poderosa para mejorar la prestación de servicios, así como algo que debe valorarse por sí mismo. De manera similar, las mujeres son importantes agentes de cambio y facilitar su total participación en la vida democrática es un objetivo de política de gran relevancia.

La implementación de una agenda de política de cohesión social requiere una administración eficaz y una acción coordinada en múltiples terrenos de política. Las instituciones fuertes y un servicio público de calidad apuntalan la acción pública exitosa. En primer lugar, los países deben concentrarse en fortalecer el servicio civil y la calidad de la regulación, entre otros al mejorar la gestión de recursos humanos en el empleo público y poner en marcha mecanismos de "asignación de presupuestos basada en el desempeño". En segundo lugar, se necesita cooperación horizontal entre todos los ministerios, puesto que la eficacia de diferentes intervenciones se interrelaciona. En tercer lugar, muchas economías emergentes y en desarrollo están fortaleciendo su capacidad institucional mediante la descentralización y la conformación de capacidades locales, pero los beneficios están lejos de ser automáticos. La participación de múltiples actores en los diferentes niveles de gobierno requiere que las funciones se negocien para asegurar la rendición de cuentas. En suma, los complejos vínculos entre las áreas de política significan que se requieren herramientas para la coordinación tanto vertical como horizontal y el gobierno central debe asumir una función de gestión activa. La conformación de instituciones requiere tiempo y, en consecuencia, la puesta en marcha de una agenda de cohesión social demanda un compromiso duradero.

Mejores datos, mejores evaluaciones, mejores políticas

La elaboración de políticas también debe basarse más en evidencias. Las políticas económicas y sociales para fomentar la cohesión social en la práctica requieren un marco para evaluaciones prospectivas y retrospectivas de su impacto: ¿conducen a una mayor o menor exclusión social? ¿Propician la confianza y la participación cívica? ¿Ayudan a mejorar la movilidad social? La supervisión y evaluación de las políticas de cohesión social que pueden responder estos cuestionamientos demandan nueva información. Como se plantea en el informe de 2009 de la comisión Sen-Stiglitz-Fitoussi, la medición de los avances debe utilizar indicadores más allá del crecimiento del PIB para comprender otras dimensiones del bienestar. Las medidas absolutas y objetivas de los avances deben complementarse con medidas relativas y subjetivas para una evaluación más eficaz.

Los esfuerzos para recabar información y poder calcular dichas medidas se concentran actualmente en los países desarrollados y en su mayoría son realizados por organizaciones privadas. La comparabilidad, la disponibilidad y la calidad de la información podrían mejorarse si (también) la recabaran oficinas nacionales de estadística. Sin embargo, el potencial de los datos sólo podrá explotarse de manera completa si a) se cuenta con estándares internacionales para la recopilación de información, b) la conformación de la capacidad estadística se facilita en los países donde se necesita, y c) la información se hace pública tanto como sea posible.

Perspectivas: cohesión social para un crecimiento sostenible a largo plazo

La transformación estructural de las economías ocasionada por la integración en la economía mundial ofrece posibilidades sin precedentes de fomentar la cohesión social. La disponibilidad de mayores recursos fiscales puede

utilizarse para desarrollar sistemas de seguridad social más exhaustivos con miras a proteger a todas las secciones de la población. El éxito de cambiar instituciones discriminadoras contra las mujeres en algunos países puede ser una inspiración para otros. En una economía más completamente integrada se vuelve imperativo desarrollar un modelo educativo que permita la movilidad social ascendente.

Promover la cohesión social no es promover una visión apolítica de los desafíos que la sociedad enfrenta. Fomentarla como un objetivo general sólo podrá conseguirse si los principales interesados de una sociedad –las autoridades, las organizaciones empresariales y los grupos de la sociedad civil– participan y trabajan en forma activa y coordinada para emprender juntos una acción colectiva. Los donantes pueden prestar su apoyo al ayudar a desarrollar un entorno en el cual las personas puedan participar activamente y expresarse, y en el cual el gobierno sea conminado a rendir cuentas. Es probable que el proceso de transición que muchos países convergentes ahora atraviesan sea turbulento y propenso al conflicto. No obstante, si se gestiona con cuidado, ofrece la oportunidad de abordar desigualdades añejas, desarrollar un sistema de seguridad social más incluyente, crear un sentido de pertenencia y así fortalecer el potencial para un camino de crecimiento sostenible y a largo plazo.

© OECD

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

Se autoriza la reproducción de este resumen siempre y cuando se mencionen el título de la publicación original y los derechos de la OCDE.

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos de publicaciones de la OCDE editados originalmente en inglés y en francés.

Pueden obtenerse en forma gratuita en la librería en Internet de la OCDE www.oecd.org/bookshop

Si desea más información, comuníquese con la Unidad de Derechos y Traducciones, Dirección de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE en: rights@oecd.org o por fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, Francia

Visite nuestro sitio www.oecd.org/rights

